

conozca todos los hilos que integran el complejo sistema de producción, tráfico y distribución de la droga, y que conozca, también, a los funcionarios públicos mexicanos y de otros países involucrados en el negocio de la droga. El caso del general Noriega, de Panamá, y del general Durazo, de México, demuestran claramente esta afirmación. En estas condiciones, el gobierno mexicano era sumamente débil ante la presión norteamericana para celebrar un tratado de libre comercio. El chantaje político estaba a la vista.

Como segundo factor debe considerarse que, en el momento justo, había ascendido al gobierno de México un grupo de políticos ambiciosos, educados en Estados Unidos y admiradores de su progreso y de las técnicas de su progreso. Sin ningún sentido de identidad ni con el pasado histórico ni con el pasado reciente de la nación, este grupo admitió con beneplácito el proyecto librecambista de los Estados Unidos.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio empezó el desmantelamiento del aparato económico y social construido por la Revolución a lo largo de más de sesenta años. Se borraron de la Constitución las disposiciones propositivas y, con ello, se privó al Estado, al gobierno, de la base legal de su dinamismo en materia económica y social. El Estado fue convertido en un armatoste jurídico pasivo, ajeno a los problemas de la economía menor, de la economía del pueblo. El gobierno mexicano pasó a ser objeto de los caprichos de los grandes industriales y banqueros, como en el viejo Manchester, quienes, desde entonces, manipulan la política oficial de acuerdo con sus intereses.

Para ajustar al país a la norma de mercado libre interior impuesta por la doctrina neoliberal en que se sustenta el Tratado de Libre Comercio, el gobierno procedió a desincorporar y privatizar todas las grandes empresas industriales y de servicios propiedad de la nación, es de-

cir, de todos los mexicanos. Pasaron a manos particulares la industria del acero, del cemento, del cobre, los bancos, las carreteras de primera clase, los ferrocarriles, etc., etc. Las más de ochocientas empresas grandes, medianas y pequeñas que eran propiedad de la nación, pasaron a propiedad de particulares.

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no han sido privatizadas gracias a la enérgica oposición de sus propios trabajadores y de importantes grupos de la sociedad. No obstante, es preciso mencionar que, hace unos tres años, ambas empresas fueron objeto de una intensa campaña de desprestigio para apoyar la existencia de los grupos beneficiados con las privatizaciones de que fueran también puestas en venta al mejor postor. No caben dudas acerca de que, detrás de la campaña publicitaria contra Pemex estuvieron las manos y el dinero de las poderosas empresas petroleras norteamericanas e inglesas expropiadas de sus bienes en México por el general Lázaro Cárdenas en 1938.

Los efectos económicos y sociales de la sumisión del gobierno a las necesidades del comercio exterior de los Estados Unidos, no se hicieron esperar.

Primero llegaron las grandes tiendas comerciales encargadas de distribuir aquí los productos de la industria norteamericana. Sus modernas instalaciones y la abundancia de los productos ofrecidos a los clientes, forzaron la desaparición del mercado, de medianos y pequeños comercios con el consiguiente despido de sus empleados y la desocupación de sus dueños. Y, como efecto directo de esta contracción del mercado de productos mexicanos, cerraron sus operaciones las empresas medianas y pequeñas que los abastecían.

Se calcula que en dos años de vigencia del libre comercio, la desaparición de empresas productoras y co-

merciales alcanzó, en México, la cifra de catorce mil unidades.

A este proceso aniquilador de la economía de mercado netamente mexicana contribuyó la invasión masiva de capital extranjero, en inversiones industriales directas y en empresas de servicios y financieras. Todo esto al mismo tiempo que en la frontera con los Estados Unidos se instalaron empresas industriales, con el carácter de maquiladoras, es decir, de empresas norteamericanas dedicadas a producir por encargo de sus matrices, empresas con sede en los Estados Unidos. La mano de obra mexicana es barata y disminuye el costo de producción en las maquiladoras. Las matrices pueden competir con ventaja en el mercado norteamericano y aún en el mundial con la producción barata de las maquiladoras. El empleo generado tanto por los centros comerciales como por las empresas de inversión directa y las maquiladoras, no cambió en nada la situación de los obreros y empleados, toda vez que la razón de ser de estas empresas en territorio mexicano es, precisamente, producir con mano de obra pagada al mínimo posible.

Todo esto y ciertos descalabros sufridos por el gobierno de México, debidos, en gran parte, a la debilidad financiera a la que se ve reducido por su nueva política, agravaron la situación de la economía del país, hundiéndola en una crisis de efectos verdaderamente desastrosos. El peso mexicano sufrió una desvalorización mayor a cien por ciento y otras empresas mexicanas, cuya producción estaba de algún modo relacionada con el valor del dólar, se vieron obligadas a cerrar sus operaciones y a despedir a sus trabajadores.

Millones de trabajadores quedaron sin empleo fijo y se expandió por todo el país el comercio informal, o sea, el comercio de chácharas al que recurren las familias en desesperación en busca de algunos centavos para subsistir. Las familias se disgregaron; prácticamente

todos sus miembros salieron a las calles en busca de alimento. Se extendió la prostitución entre las mujeres jóvenes y los niños dejaron las escuelas para trabajar aseando automóviles en los cruceros de las avenidas de las ciudades. Las iglesias se vaciaron de fieles y los sacerdotes perdieron su credibilidad ante la angustiada situación de la sociedad. Con su autoridad moral perdida ante el desastre que aflige a sus feligreses, los sacerdotes se dedicaron a simular una defensa de la sociedad mediante críticas banales al gobierno y prédicas carentes de todo sentido de autoridad y de verdad. El sistema bancario de México se vio asediado por el capital financiero que entró libremente en el país y se produjo una crisis en el sector que estuvo a punto de desquiciar a la nación entera. La banca se desquitó echando a la calle a miles de sus deudores hipotecarios, quienes pagaron, con la pérdida de sus casas, las consecuencias sociales de la política de libre comercio.

Dígame lo que se quiera, la nación está en crisis. La mayoría de la población depauperada y gran parte de ella en los límites de la miseria. La política manchesteriana del gobierno ¡Todo para una sola clase! ha vuelto a los industriales y a los banqueros ricos, cada vez más ricos.

La corrupción no cede. Aparece la violencia en las principales ciudades del país y se multiplican los asaltos a negocios importantes en la capital de la República. Y, en estas condiciones, estalla la sublevación social y militar de Chiapas.

El caso Chiapas

El primer día del mes de enero de 1994 los mexicanos fuimos sorprendidos con la noticia de que en el estado de Chiapas había estallado un serio movimiento armado de los indígenas de la región, jefaturado por un

grupo denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La información propalada por periódicos, radio y televisión daba cuenta de que ese mismo grupo había iniciado sus operaciones militares atacando y ocupando algunos poblados más o menos importantes de la sierra de Chiapas. Se hablaba de que era gente que vestía uniforme, bien disciplinada y portadora de armas, si no todas, muchas de ellas semejantes a las que usa el Ejército Nacional.

Al principio todo mundo pensó que aquella sublevación era el grito desesperado de los indígenas de la región contra la inicua situación en que vivían. Se pensó que, abandonada toda esperanza de redención, los indígenas tomaban las armas para forjarse su propio destino.

Pero en el manifiesto que publicaron los líderes del movimiento, en el que advirtieron a la nación sobre sus objetivos políticos y sociales, se usó un cierto lenguaje que permitió a la gente experimentada de México sospechar de la intención verdadera que animaba sus objetivos.

En el manifiesto se hablaba de ideales socialistas y de imponer esos ideales a la nación al llegar a la capital de la República la fuerza armada sublevada. Ese lenguaje parecía excesivo y, en cierto modo, provocativo. Hacia ya varios años, desde el cambio de ideología de los dirigentes de la Unión Soviética, que en ninguna parte del mundo y, por supuesto, de México, se hablaba de socialismo, ni como programa ni como meta política de algún grupo social. Las ideas expuestas en el manifiesto parecían dirigidas a despertar inquietud y temor en la población chiapaneca ante una nueva edición, pero esta vez militarizada y armada, del "peligro comunista". Parecía, ciertamente, que la idea central era la redención de los indígenas, pero envuelta en un lenguaje pseudosocialista que necesariamente iba a suscitar la oposición virulenta

de la población conservadora de Chiapas, particularmente de los terratenientes y ganaderos, al mismo tiempo que el desconcierto de quienes desean sinceramente el cambio de la situación social de los indígenas pero que no admiten el socialismo como meta salvadora de los indios. La confusión social que se esperaba desencadenar con las ideas expuestas en el manifiesto, respaldadas por la presencia armada de los indígenas, tendría necesariamente que producirse. Fuera de Chiapas, el movimiento militar parecía ingenuo, pero digno de ser atendido por el gobierno federal, sobre todo en su patética expresión de reclamo social de los indígenas. Por esta razón, el movimiento zapatista fue visto con simpatía a pesar de lo absurdo de sus pretensiones inmediatas, la socialización de México por la fuerza de sus armas.

El movimiento armado jefaturado por E.Z.L.N. era relativamente fuerte, capaz de imponer, no el socialismo, pero sí el temor, el desconcierto social y la confusión política en Chiapas, primeramente y, después, en la nación. Era obvio que se buscaba la violencia en Chiapas, pero anárquica, en medio de una confusión de ideas generalizada.

El ejército fue movilizado para detener el avance de la fuerza armada sublevada. Se produjeron algunas escaramuzas y, de pronto, el presidente de la República ordenó al ejército suspender las hostilidades y limitarse a mantener su línea de defensa.

Habían ocurrido dos hechos que explicaban la orden del presidente. A los primeros disparos del ejército contra los sublevados estalló en México, en varios lugares de los Estados Unidos y hasta en Europa, una recia gritería de pequeños grupos de gente que denunciaba las *masacres* del ejército y la violación de los derechos humanos de los indígenas de Chiapas. Resultaba claro que la simultaneidad de la sublevación militar y el escándalo nacional e internacional sobre los derechos humanos es-

taba orquestada de antemano. Por otra parte, en los primeros días del enfrentamiento del ejército con el EZLN, llegaron intempestivamente a México los expresidentes de las repúblicas del El Salvador y Honduras, para conversar con el presidente de México. Sólo una hora duró la reunión de los tres personajes y los visitantes regresaron a sus países. No se supo lo que conversaron; pero era obvio adivinarlo. Cristiani, de El Salvador, debió decir al Presidente de México: "Desde fuera se ve muy claro el conflicto. Alguien está manejando los hilos de la situación. Este alguien pretende hacer de Chiapas un pequeño infierno de desorden; enfrentar a religiosos contra religiosos, a ganaderos contra los zapatistas *comunistas*, a los terratenientes contra los indígenas sin tierra que ahora forman parte de E.Z.L.N., a los partidos políticos por su distinta visión del problema. Así empezó el desorden social en El Salvador que dio origen a un Frente de Liberación Nacional, armado por (nosotros sabemos quién) y llevamos más de doce años combatiendo unos con otros, ejército contra guerrilla. Y lo mismo sucede en Perú, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias llevan ya quince años cometiendo asaltos, secuestros, destruyendo oleoductos, bombardeando ciudades, sin que sepamos a ciencia cierta qué es lo que verdaderamente buscan. Lo que sí sabemos es que nunca les faltan las armas". Todo indica que México puede caer en una situación parecida. Obviamente, se trataba de una trampa para segregarse a Chiapas de la gobernabilidad del poder federal. Además, el ejército y el gobierno federal aparecerían como los villanos del conflicto, tanto por la pretendida justificación histórica del movimiento zapatista, como por la incapacidad oficial de restablecer el orden en el estado.

Cuando el ejército suspendió el fuego y se mantuvo en sus líneas, los sublevados no tuvieron más remedio que remontarse a la selva, a su ignorado escondrijo. Pero entonces aparecieron pequeños grupos armados que se dedicaron a matar a mansalva a familias enteras

de campesinos indígenas, grupos que fueron inmediatamente calificados como paramilitares, para dejar latente una supuesta relación de estos grupos con el ejército. Estos hechos arrojaron el clamor contra la *violación de los derechos humanos* por parte del ejército y se llegó al extremo de pedir la intervención de las Naciones Unidas, o sea, de los Estados Unidos, para apaciguar el conflicto.

Al mismo tiempo, en el estado de Guerrero aparecieron otros grupos armados, ahora sin teoría política alguna, que se han dedicado a matar soldados por sorpresa, igualmente como ocurre ahora mismo en la República de Colombia. Estos grupos aparecen uniformados y bien equipados con armas modernas y se desplazan fácilmente lo mismo al estado de Morelos que al de Guerrero o de Hidalgo.

Es revelador el hecho de que, a partir del día en que el ejército suspendió sus actividades en la zona, el *Ejército Zapatista* no haya dado señales de vida, en la forma de acciones militares. Se ha limitado a formular distintas declaraciones públicas en las que ya no insiste en el socialismo, sino que ahora exige que, primero, el ejército se retire de Chiapas y, segundo, que el gobierno reforme la Constitución General de la República para dar forma legal a la existencia de áreas de jurisdicción indígena, donde las comunidades autóctonas se rijan por sus propias leyes y costumbres. Esta exigencia de que se retire el ejército se ha convertido en el punto central petitorio de los zapatistas y de los grupos políticos y sociales que apoyan su movimiento dentro y fuera del país.

La presión nacional e internacional para que el gobierno retire al ejército de Chiapas es muy intensa. Pero el gobierno no puede acceder ni a una ni a otra exigencia. No puede retirar al ejército dejando al E.Z.L.N. dueño de la zona a título gratuito; ni puede acceder al establecimiento constitucional de regiones autónomas

para hábitat de los indígenas sin romper el sistema republicano establecido en la Constitución desde la independencia de México. Además, sería tanto como dejar abandonados a los grupos indígenas a la intervención de toda clase de especuladores, nacionales y extranjeros, ávidos de la riqueza petrolera y forestal del estado.

Por mi parte, creo firmemente que ese alguien, que está manipulando el conflicto de Chiapas, está siguiendo el mismo camino que siguieron los tejanos para independizarse de México y, después, unirse a los Estados Unidos. Primero promover y estimular por todos los medios la irritación del pueblo contra el gobierno central. Dada la situación económica y social de México, esto no ha sido difícil de conseguir. Después, declarar la independencia del estado (porque el gobierno central ha roto el orden constitucional). Después, solicitar protección extranjera contra acciones militares del gobierno central. Esta protección sería otorgada por la ONU a través del ejército de los Estados Unidos. Después se pediría el estatus de protectorado para Chiapas y, tal vez, para todo el sureste mexicano. Así México perdería sus derechos al petróleo, al uranio y a la riqueza forestal de la región. Para efectos políticos y legales el protectorado de Chiapas tendría el mismo valor que la independencia de Texas.

Ya en otra ocasión se ha tratado de crear este mismo clima en Chiapas y en la nación entera. Recuérdese el caso del presidente guatemalteco Idígoras y su propósito de declarar la guerra a México para anexarse el estado de Chiapas. Todo por encargo del gobierno norteamericano, y, éste, como promotor de los intereses de las grandes empresas petroleras de su país. Y eso porque Chiapas es uno de los estados más ricos de la República, sobre todo en petróleo y en uranio. En aquel tiempo se pudo demostrar que, detrás de todo el alboroto causado por Idígoras, estaban la mano y el dinero de las empresas petroleras de los Estados Unidos, las empre-

sas más poderosas del mundo, cuyas instalaciones en México habían sido nacionalizadas por el general Lázaro Cárdenas. Las intrigas internacionales de estas empresas, para rescatar el dominio del petróleo de México, estaban debidamente respaldadas por el gobierno norteamericano, quien, precisamente en ese tiempo, había mostrado su intención de instalarse en Tehuantepec, por medio de un proyecto canal interoceánico. Idígoras, el presidente guatemalteco, fracasó en su intento porque quiso atacar a México de frente, mediante un incidente militar que no llegó a producirse. Ahora se pretende que sea el propio pueblo de Chiapas (Los indígenas zapatistas sublevados) el que pida la intervención militar de los Estados Unidos.

Pero aún hay más, al final de este año el gobierno de los Estados Unidos deberá entregar al de Panamá las instalaciones y la administración del canal interoceánico que lleva el nombre de este país. El problema para el transporte comercial marítimo de los Estados Unidos va a complicarse. De esto no hay ninguna duda. Y es por esta razón que, desde hace algunos años, en previsión de esta futura situación, los norteamericanos solicitaron al gobierno mexicano la concesión necesaria para abrir un canal, ya sea de agua o terrestre, que sustituya al de Panamá. Este canal cruzaría el Istmo de Tehuantepec, con entrada en Salina Cruz, en el Pacífico, y salida en Coatzacoalcos, en el Golfo de México. En aquel tiempo, ni López Mateos, entonces presidente de México, estaba dispuesto a otorgar semejante concesión, ni los norteamericanos parecían muy urgidos de obtenerla. El caso quedó pendiente. Pero los tiempos han cambiado y no sería aventurado afirmar que sea el propio gobierno norteamericano quien esté interesado en el problema de Chiapas.

Esta es la situación en que México se encuentra hoy, por virtud de la política manchesteriana oficial.